



José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y de su filial Banco de Valencia, ambos desaparecidos en la actualidad.

F. MORENO

Los casos de José Luis Olivas y Miguel Blesa guardan cierto paralelismo. Los expresidentes de Banco de Valencia y Caja Madrid, respectivamente, están perseguidos por la justicia por decisiones estratégicas que incluyen a sus cúpulas directivas. Los dos se rodearon de empresarios que querían llegar a serlo por la vía rápida. Les

concedieron créditos sin control. Engañaron a cientos de miles de preferentistas y, tras su marcha, dejaron un agujero millonario al Estado que acabó en el mayor rescate financiero de España. Olivas, al igual que Blesa, construyó una entidad enladrillada hasta las cejas que ha acabado pagando el contribuyente.

La fiebre del ladrillo le llevó a aumentar el crédito al 30% anual y a beneficiar a empresarios amigos como los Calabuig, Romaní o el exministro Asunción

Olivas, el 'Blesa' valenciano

■ Esmeralda Gayán

Tras el culebrón de Miguel Blesa, llega el de José Luis Olivas. El ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia figura entre los cien banqueros imputados por los tribunales por una larga lista de prácticas fraudulentas que conllevaron a dejar un agujero en el balance, en el caso del banco valenciano, de más de 1.000 millones de euros, que tuvo como consecuencia la intervención directa del Banco de España.

La reciente desaparición del Banco de Valencia es el último capítulo del culebrón financiero que viven las Cajas y bancos de la Comunidad Valenciana. En plena crisis, la entidad concedió créditos por importe de 100 millones de euros a su consejo de administración. Así lo recoge el informe de gobierno corporativo de la entidad en 2010, el mismo año en que tuvo que ser intervenida por sus problemas de solvencia.

El consejo de la entidad estaba integrado entonces por un total de ocho miembros presididos por José Luis Olivas, todos ahora investigados por la justicia.

Su llegada a Bancaja – y por tanto a su filial Banco de Valencia – fue el premio por los servicios prestados al Partido Popular en el Gobierno de la Generalitat y el reconocimiento esperado por su lealtad a Eduardo Zaplana. Cuando éste acudió a la llamada de José María Aznar para ser ministro de Trabajo, Olivas asumió de forma interina la presidencia de la Generalitat hasta 2003, en que Francisco Camps se presentó a las elecciones.

Tras dejar el cargo público – que no la vida pública – se instala en la cúpula de la primera institución financiera valenciana – Bancaja – precisamente gracias a la ley regional de Cajas que él mismo había redactado siete años antes. El cargo le convirtió automáticamente en presidente del Banco de

Valencia, controlado en un 38% por Bancaja.

Y a partir de ahí, comenzaron los problemas. Olivas y sus consejeros comenzaron a construir su propio castillo de fuegos artificiales mientras a su alrededor todo comenzaba a prenderse fuego.

El político metido a banquero concedió créditos a proyectos faraónicos de la era del ladrillo como Polaris World, un caso por el que ahora está siendo investigado. Esta querrela es una de las siete presentadas por el FROB por unos supuestos daños al Banco de Valencia de 630 millones de euros. La operación consiste en la refinanciación que Bancaja y Banco de Valencia, junto con la antigua CAM y el Banco Popular, suscribieron en 2009 con Polaris World para rescatarla y evitar que entrase en concurso de acreedores. Entre renovación y crédito nuevo, las entidades tuvieron que inyectar 300 millones de euros cuando, por aquellas fechas,

el macrocomplejo de golf y viviendas de la promotora de Facundo Armero ya comenzaba a hacer aguas como consecuencia del estallido de la burbuja. En abril de 2010, Bancaja y el Banco de Valencia tuvieron que adjudicarse activos de Polaris World. Algunos consejeros de Bancaja llegaron a expresar su malestar por la operación que calificaron de "locura", aunque no llegaron a reflejar sus quejas en las actas, lo cual da a entender, como en el caso de Caja Madrid, que nadie llevaba la contraria al presidente en los consejos.

Inversiones entre amigos

Además de la de Polaris, el informe del Banco de España señalaba otras actuaciones que forman parte del paquete de querrelas presentadas por el FROB. Una de ellas es la creación y posterior desarrollo y gestión de la sociedad Nou Litoral, constituida para urbanizar suelo en Riba-roja. En esta operación apa-

recen implicados muchos nombres del universo empresarial y social valenciano como el promotor Salvador Vila o el expresidente del Valencia CF, Juan Soler, y varios familiares suyos. También se sumaron después el notario Carlos Pascual y el empresario Fernando Polanco. El suelo original era propiedad de los hermanos Gallego de Llanera.

El Banco de Valencia dio un préstamo de tres millones a Jaume Matas, expresidente de Baleares, para hacer frente a su fianza judicial por el 'caso Urdargarín'

La entidad liderada por Olivas daba un perfil muy "peculiar" a sus inversiones en adquisición de empresas, muchas de las cuales pertenecían a socios y amigos del propio Olivas y, sobre todo, de su mano derecha, Domingo Parra, que acumula más demandas que el presidente. Juntos compraron compañías de los empresarios valencianos Eugenio Calabuig y Lucas Romaní – amigo de la infancia de Aznar –, o de Antoni Asunción, quien fuera ministro del Interior cuando huyó Juan Roldán, y que fue expulsado del PSOE tras acusar al partido de haber hecho pucherazo en las primarias de Valencia.

Mención especial merece el caso del empresario valenciano Eugenio Calabuig, a la vez consejero de Banco de Valencia. Según las pesquisas de KMPG, Parra le concedió financiación para comprar Aguas de Valencia, participada también por la filial de Bancaja. A su vez, Calabuig, que se alzó con la presidencia de Aguas de Valencia en 2007 tras una polémica OPA, benefició presuntamente a sociedades personales de Domingo Parra, como Inversiones Izpa, creada en el año 2005 por el propio Parra. Calabuig no hizo frente al préstamo concedido por Banco de Valencia, que le condonó la deuda a cambio de activos inmobiliarios. Dichas propiedades tenían un valor real al registrado en libros, por lo que el canje le provocó una pérdida patrimonial a la entidad y, posteriormente, al Estado. Banco de Valencia intentó antes de su intervención vender al grupo de Calabuig su participación del 30% en Aguas de Valencia a través de Inversiones Financieras Agval, pero BFA-Bankia vetó la transacción al sospechar ya de presuntas irregularidades.

La segunda trama relacionada con la anterior es la de Costa Bellver. El préstamo a Calabuig fue a parar al balance del Valencia CF. El club de fútbol le devolvió posteriormente el préstamo de unos 55 millones de euros al empresario, que lo destinó posteriormente a adquirir la promotora inmobiliaria. Más adelante, el empresario recibió unos 107 millones de euros por el 83% de su participación cuando sus activos apenas valían 10 millones.

Las posibles irregularidades no acaban ahí. Según distintas fuentes, el FROB también sospecha de la compra de una empresa de piscifactoría al exministro Antoni Asunción, así como el préstamo de tres millones de euros concedido a Jaume Matas, expresidente de Baleares, para hacer frente a su fianza judicial por el caso Urdargarín. Todo un culebrón judicial que va para largo, según los expertos, por la cantidad de personas implicadas en el caso y por la complejidad del mismo.

El crédito siguió multiplicándose en los años del 'boom'

■ Los proyectos que financiaba el Banco de Valencia tenían mucho alcance político, pero eran tan poco rentables económicamente que comenzaron a escavar agujeros en el balance de la entidad, que acabó siendo un queso Gruyere. Los problemas se hicieron especialmente patentes a partir de los años calientes de la burbuja, entre 2005 y 2007. En esos años bajó notablemente el porcenta-

je del balance financiado por depósitos, de más del 65% en 2004 al 52% de 2008, según los datos que figuran en la CNMV.

El motivo es que el Banco de Valencia estaba incrementando notablemente los créditos a la clientela, aumentando una media del 30% anual.

La fenomenal expansión del balance de la entidad presidida por José Luis Olivas sólo pudo financiarse mediante la emisión de deuda

mayorista, que incluía también bonos de titulización. En la memoria de 2005 la titulización está recogida como depósitos (9.126.280 miles de euros) mientras que en la memoria de 2006 son en cambio 7.828.998 miles de euros.

En el capítulo del pasivo también están incluidas las preferentes por 170 millones que se emitieron en el año 2006, una emisión de carácter

perpetuo con una opción de recompra a favor del emisor a partir de 2016. Unos productos que se traspasaron a Bankia y por cuya comercialización está llamado a declarar Olivas junto a otros ex directivos.

Pero además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido la querrela presentada por los pequeños accionista del Banco de Valencia y ha

incoado un nuevo procedimiento en el que investigará a un total de 27 personas físicas y jurídicas entre las que se encuentran, además de Olivas, el exconsejero delegado Domingo Parra y los ex vicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar.

Pedraz les investigará por delitos societarios, falsedad contable y administración desleal, abusiva y fraudulenta.